



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

Causa N° FSM 23688/2024/20/CA6, Carátula: “
Legajo N.º 20 - IMPUTADO: D’O [REDACTED], JORGE
ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”, del
Juzgado Federal de Campana, Secretaría N° 2.
Registro de Cámara: 11.787

San Martín, 2 de marzo de 2026.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas particulares de **Facundo A [REDACTED]** —Dra. Griselda Cecilia T [REDACTED]— y de **Jorge Alberto D’O [REDACTED]** —Drs. Ramiro y Juan Isidro P [REDACTED]— contra el auto que dispuso sus procesamientos como coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito y, en el caso de D’O [REDACTED], con el agravante derivado de su calidad de funcionario público.

Asimismo, la defensa de Facundo A [REDACTED] se agravia del embargo de trescientos millones de pesos (\$300.000.000).

En esta instancia, las partes mantuvieron sus respectivos recursos mediante la presentación de memoriales y desistieron de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación.

II. Al expresar sus agravios, las defensas coinciden en afirmar, por un lado, la falta de motivación suficiente del decisorio y, por otro, la arbitrariedad en la valoración de la prueba reunida, que —a su entender— resultaría insuficiente para sustentar el auto impugnado.

Sostienen que la sola existencia de una cédula azul extendida a favor de D’O [REDACTED], así como el pago del Telepeaje por su parte, no constituyen elementos suficientes para tener por acreditada la titularidad real del vehículo en cuestión.

Refieren la legitimidad del contrato de préstamo con la firma “Los Altos de D [REDACTED] S.A.” y señalan que no se encuentra descripto ni acreditado en el auto atacado el delito precedente requerido.

Por otra parte, cuestionan la utilización de la póliza de seguro como parámetro idóneo para establecer el precio real de la operación, en tanto afirman que los valores allí consignados suelen encontrarse sobrevaluados, y que el monto declarado —treinta millones de pesos— se corresponde con las referencias de mercado publicadas por ACARA.

Fecha de firma: 02/03/2026

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LEONARDO JAVIER AMERISE, PROSECRETARIO DE CAMARA



#40760947#490824506#20260302130225110

Señalan la falta de realización de medidas probatorias solicitadas por las defensas, como las de verificar la venta de inmuebles que originaron los fondos o investigar el uso real del vehículo mediante registros de cocheras e ingresos a barrios cerrados.

Luego, en lo particular, la defensa de D'Ó [REDACTED] insistió en la competencia provincial, argumentando que no hay afectación a bienes jurídicos federales y que el procesamiento vulnera el principio de organización federal.

Destaca que, tras múltiples oficios a bancos y registros, no se encontró ninguna irregularidad en su patrimonio personal que justifique la sospecha de lavado. Se agravia específicamente porque no se citó a los testigos que, según la denuncia, lo veían llegar en el Audi, lo cual considera que habría probado su inocencia.

Por su parte, la defensa de Facundo A [REDACTED] se agravia del rol atribuido a su asistido, con fundamento en que se hallaría acreditada su solvencia patrimonial y la licitud del origen de sus bienes, y cuestiona el embargo decretado por considerarlo desproporcionado.

III. Con relación a la queja que en común sostienen las partes, relativas a la falta de fundamentación del resolutivo y la arbitraria valoración de la prueba reunida, cabe destacar que el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación demanda que los autos deben estar motivados, a la par que el Máximo Tribunal ha calificado arbitrario a todo aquél que carece de fundamentación (Fallos: 329:4663); que sujeta el hecho al derecho sin constituir una derivación razonada del ordenamiento jurídico (Fallos: 330:1465); que no constituye una deducción lógica del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados en la causa (Fallos: 310:2091); que omite tratar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la concreta solución del pleito, si tal omisión importa un desmedro del derecho de defensa (del dictamen del Procurador General de la Nación al que remitió la CSJN en Fallos: 329:3048; y 323:2839); que entra en contradicción con lo que surge racional y objetivamente de la valoración en conjunto de las diversas pruebas, indicios





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

**Causa N° FSM 23688/2024/20/CA6, Carátula: “
Legajo N.º 20 - IMPUTADO: D’O [REDACTED], JORGE
ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”, del
Juzgado Federal de Campana, Secretaría N° 2.
Registro de Cámara: 11.787**

y presunciones que constan en el expediente (Fallos: 319:1728); y que omite la ponderación colegida de las pruebas producidas y constituye una formulación dogmática (Fallos: 319:722); entre otras causales.

Es criterio de la Sala que la exigencia de la motivación y fundamentación de las decisiones judiciales observa las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso (artículos 18 de la CN, 8 CADH, 14 PIDCP, 9 y 11 DUDH y 26 DADDDH; y Secretaría Penal N° 1, FSM 30037/2015/CA1, “Fontanella, Eduardo Jesús s/uso de documento adulterado o falso”, registro de Cámara N° 11.941, resuelta el 24/4/2019; entre muchos otros), en la medida que exterioriza las razones de los jueces para dictar sus pronunciamientos, tanto en los aspectos fácticos como jurídicos, porque los obliga a desarrollar sus reflexiones para arribar a la decisión, de una manera clara, completa, coordinada entre los distintos argumentos y entre los argumentos y las resoluciones, apoyado en los hechos probados en el expediente y en la ley vigente, que dan base a su juicio, todo lo cual valorado racionalmente, de modo que establezca la lógica de la solución del conflicto (Jauchen, Eduardo, Tratado de Derecho Procesal Penal, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, t. II, págs. 20-22; D’albora, Francisco J., Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado, 7° edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, t. I, págs. 262-263; y Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal, Ediar, Buenos Aires, 1964, t. IV, p. 295).

En esa actividad, los criterios de selección y apreciación de la prueba son facultades privativas de los jueces (Fallos: 328:957), quienes puedan dar preferencia a determinados elementos sobre otros (Fallos: 330:2639), sin que estén obligados a pronunciarse sobre la totalidad del material probatorio, sino sobre lo relevante para fundar sus conclusiones (Fallos: 319:3470) y las meras discrepancias con esas pautas, son insuficientes por sí solas para descalificar los pronunciamientos, aun cuando los magistrados hayan prescindido de algunas de las pruebas aportadas (Fallos: 338:1156), en la medida que la doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional y exige un

Fecha de firma: 02/03/2026

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LEONARDO JAVIER AMERISE, PROSECRETARIO DE CAMARA



#40760947#490824506#20260302130225110

inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación (Fallos: 325:1922; y 323:4028).

Siguiendo ese lineamiento, se estima que el fallo impugnado cumple con la manda de motivación que prescribe la norma, pues contiene una explicación de la conclusión a la que arriba el señor juez a quo, que aparece como el resultado de un análisis racional de los elementos obrantes en el legajo y su aplicación al caso concreto.

Además, las defensas pudieron válidamente poner en ejercicio los mecanismos de impugnación habilitados, de modo que la pretensión en este sentido no ha de tener andamio.

IV. Puestos a resolver sobre los restantes agravios introducidos por las partes, caben efectuar las siguientes consideraciones.

De las constancias obrantes en el sumario se desprende que, el 19 de octubre de 2023, Facundo A. [REDACTED] inscribió a su nombre la camioneta Audi Q8, dominio AE [REDACTED] ZD, declarando un valor de adquisición de treinta millones de pesos (\$30.000.000); la aseguró por la suma de ciento setenta y tres millones ochocientos mil pesos (\$173.800.000) y extendió una cédula de autorización para conducir a favor de Jorge Alberto D'O [REDACTED]. Asimismo, se constató que este último, el 30 del mismo mes, gestionó la adhesión del vehículo al sistema Telepase, utilizando su correo electrónico personal y abonando el servicio con su tarjeta de débito. Finalmente, el 12 de noviembre de 2024 A. [REDACTED] vendió la camioneta por la suma de setenta y siete millones trescientos diez mil pesos (\$77.310.000).

En cuanto al origen de los fondos, la defensa sostiene que su procedencia es lícita y se encuentra debidamente respaldada mediante documentación. Señala que A. [REDACTED] habría recibido la suma de treinta millones de pesos a través de un contrato de mutuo de fecha 12/10/2023, celebrado con la sociedad "Los Altos de D. [REDACTED] S.A.", presidida por su padre, y que parte de los fondos provendrían de la venta de un inmueble instrumentada mediante escritura del 05/07/2023.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

**Causa N° FSM 23688/2024/20/CA6, Carátula: “
Legajo N.º 20 - IMPUTADO: D’O [REDACTED], JORGE
ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”, del
Juzgado Federal de Campana, Secretaría N° 2.
Registro de Cámara: 11.787**

No obstante, de las constancias del sumario surge que la mencionada sociedad no registra actividad verificada y que los domicilios denunciados ante los organismos oficiales no se corresponden con un funcionamiento efectivo, extremos que fueron ponderados por el a quo al analizar la verosimilitud del origen invocado.

Luego, al momento de prestar declaración indagatoria, los imputados brindaron distintas explicaciones en torno a la suscripción del sistema de peaje y al uso de la camioneta.

Por su parte, D’O [REDACTED] sostuvo que nunca fue propietario del vehículo y que únicamente lo condujo en una ocasión para “probarlo”, cuando la familia A [REDACTED] concurrió a cenar a su domicilio. Manifestó que la cédula azul constituyó un “gesto” de A [REDACTED] vinculado con la campaña política y el inicio de su gestión ministerial, aunque afirmó que “realmente no hizo falta” utilizarla.

En cambio, A [REDACTED] refirió que le prestó el rodado a D’O [REDACTED] en razón de la extrema cercanía que los une. A diferencia de lo declarado por este último, indicó que se lo entregó “unos días” para que lo probara, dado que tenía la intención de vendérselo.

Posteriormente, en lo que respecta a la suscripción al sistema de peaje, D’O [REDACTED] explicó que, como la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el dispositivo (TAG) le quedaba más próxima que a A [REDACTED], se ofreció a retirarlo y abonarlo con su tarjeta de débito, en virtud de la “familiaridad” existente entre ambos.

Por su parte, A [REDACTED] declaró que, como D’O [REDACTED] no tenía su propia camioneta en ese momento, le prestó el Audi y le solicitó como favor que gestionara la adhesión al Telepase, a lo cual este accedió.

Ahora bien, a diferencia de lo postulado por las partes, la ponderación efectuada por el a quo respecto de las inconsistencias advertidas supera adecuadamente el test de razonabilidad y motivación exigible a todo pronunciamiento jurisdiccional. No se trata de una inferencia conjetural ni de una apreciación subjetiva, sino de una conclusión fundada en una valoración integral, lógica

Fecha de firma: 02/03/2026

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LEONARDO JAVIER AMERISE, PROSECRETARIO DE CAMARA



#40760947#490824506#20260302130225110

y concordante del plexo probatorio reunido. En ese marco, tales contradicciones -lejos de resultar inocuas- adquieren entidad jurídica suficiente para debilitar de modo significativo la credibilidad de las hipótesis exculpatorias ensayadas por los imputados.

Asimismo, las explicaciones brindadas por A [REDACTED] para justificar la diferencia entre el valor declarado de adquisición y el monto por el cual fue asegurado el rodado, carecen de corroboración en elementos objetivos incorporados al sumario, más allá de sus propias manifestaciones, las que, en tales condiciones, resultan insuficientes para desvirtuar las conclusiones alcanzadas.

A ello se añade que Sebastián Berterretche -quien adquirió posteriormente el vehículo- declaró que la camioneta se encontraba publicada en la suma de cien millones de pesos y que, tras formular una oferta, la compró por un monto apenas inferior a los ochenta millones -\$77.310.000-, precisando que la rebaja respondió a la existencia de un rayón y un choque menor. Tales extremos otorgan sustento fáctico a la hipótesis de que el valor real del bien era sustancialmente superior al precio inicialmente declarado.

En cuanto a la alegada falta de producción de prueba, se advierte que durante la instrucción se desplegó una amplia actividad probatoria, que incluyó informes registrales y bancarios, requerimientos a ARCA e IGJ, consultas a los registros automotores, allanamientos, el secuestro del vehículo involucrado, el informe de AUBASA relativo al sistema Telepase y la incorporación del expediente provincial en el que se imputó el delito precedente.

En este contexto, las diligencias cuya omisión invoca la defensa no resultan idóneas para desvirtuar el cuadro indiciario reunido en autos.

Luego, en cuanto al reiterado planteo que efectúa la defensa de D'O [REDACTED] relativo a la competencia, cabe recordar que este Tribunal -unipersonal- ya se expidió sobre la cuestión, al momento de tomar intervención en el





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3

**Causa N° FSM 23688/2024/20/CA6, Carátula: “
Legajo N.º 20 - IMPUTADO: D’O [REDACTED], JORGE
ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”, del
Juzgado Federal de Campana, Secretaría N° 2.
Registro de Cámara: 11.787**

expediente FSM 23688/2024/2/CA1, “Legajo N° 2 - PRETENSO
QUERELLANTE: C [REDACTED], LEANDRO s/LEGAJO DE APELACION” del
13/11/2024 Registro de Cámara 11.255.

En esa oportunidad se revocó la declaración de
incompetencia dispuesta por el a quo y se sostuvo que, prima
facie, la hipótesis investigada encuadra en delito de lavado
de activos, de naturaleza estrictamente federal,
imponiéndose agotar la investigación antes de desplazar la
competencia. En tal sentido, la jurisdicción federal ya fue
ratificada por esta Alzada y el reexamen pretendido por las
partes no aporta hechos nuevos que alteren tal decisión.

Luego, en cuanto a la queja relativa a que en el
auto recurrido no hay una descripción ni prueba de un
ilícito previo y que la causa provincial no es suficiente,
corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

En primer término, cabe señalar que este Tribunal
ha sostenido con anterioridad que, para la configuración del
delito de lavado de activos, se exige que se compruebe de
manera genérica una actividad delictiva previa, pero no se
requiere la demostración plena de un acto delictivo, ni el
dictado de una sentencia condenatoria firme respecto de ese
ilícito, así como tampoco la individualización de los
concretos partícipes (Confr. FSM 24005417/2011/9/CA6 Sec.
Pen. N°3, Rta.: 3-6-2016, Reg.: 7529).

Sobre el punto, la Sala II de la Cámara Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal, sostuvo que el lavado
de dinero resulta un delito autónomo, sin necesidad de la
acreditación del delito subyacente con una sentencia previa,
resultando suficiente una referencia genérica a su origen.

Entendió, como regla de valoración del ilícito
antecedente, que el artículo 9, apartado 5, del Convenio del
Consejo de Europa sobre blanqueo, investigación, embargo y
comiso del producto de delitos y sobre financiación del
terrorismo (Convenio de Varsovia), establece que la condena
previa o simultánea del delito precedente no representa un
pre requisito para la condena por blanqueo. Se refiere a
prueba razonable de una actividad ilícita con categoría de
delito con capacidad para poner en riesgo el bien tutelado
por el Art. 303 del Código Penal a partir de los datos

Fecha de firma: 02/03/2026

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LEONARDO JAVIER AMERISE, PROSECRETARIO DE CAMARA



#40760947#490824506#20260302130225110

disponibles, cualesquiera sean estos. El ilícito precedente debe hallarse objetivamente vinculado con delitos susceptibles de generar ganancias, atento el carácter esencialmente económico del lavado de activos (Confr. CFP 3017/2013/227/CA62, del 25 de octubre de 2017 y sus citas).

No se exige, en modo alguno, la corroboración judicial del hecho delictivo previo, mediante una sentencia firme, ya que solamente basta para cumplir la exigencia objetiva, tener por acreditado que los bienes objeto del caso proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo, siendo suficiente la relación de los imputados con actividades delictivas (Confr. esta Sala y Secretaría FSM 45/2017/14/CA2, Rta.:18-4-2018, Reg.:11.386).

Sobre el tema, señala Fernando J. Córdoba: "es el tribunal que juzga el caso de lavado el que debe establecer, con la prueba producida en el proceso, si existió un hecho ilícito precedente del que proceden los bienes, pero no precisa hacerlo con la precisión y el detalle que sí harían falta si se tratase del hecho objeto de acusación, sino con la necesaria para tener por cierto el origen ilícito de los bienes" ("Delito de lavado de dinero", Ed. Hammurabi, 2017, Pág. 154).

En tal contexto, cabe agregar que el *a quo*, con relación al hecho aquí investigado y el delito precedente, precisó que Jorge Alberto D'O [REDACTED] fue formalmente imputado en la IPP N° 06-00-[REDACTED]-23/00, en trámite ante la UFI N° 11 de La Plata, en la que se investigan hechos vinculados con la malversación de caudales públicos cometidos durante su gestión como Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Extremo que consideró un sustento relevante a la hipótesis de que los fondos empleados en la adquisición del vehículo provendrían de ilícitos contra la administración pública.

Así, a esta altura del análisis, a diferencia de lo sostenido por las defensas, se advierte que el auto impugnado no se apoya en meros indicios aislados, sino en la valoración conjunta y armónica de las constancias que conforman el legajo, lo que permite concluir -con el grado





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL Nº 3

Causa Nº FSM 23688/2024/20/CA6, Carátula: “
Legajo N.º 20 - IMPUTADO: D’O [REDACTED], JORGE
ALBERTO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”, del
Juzgado Federal de Campana, Secretaría Nº 2.
Registro de Cámara: 11.787

de probabilidad propio de esta etapa—, en la convergencia
objetiva y subjetiva de los nombrados en el hecho que se les
imputan.

V. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento
formulado por la defensa de A [REDACTED] respecto del monto del
embargo dispuesto, corresponde atender a las pautas
previstas en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la
Nación, entre las cuales adquiere particular relevancia la
naturaleza del delito investigado, que prevé la aplicación
conjunta de pena de prisión y multa de dos a diez veces el
monto de la operación atribuida.

En función de tales parámetros, la suma fijada
aparece razonablemente adecuada a las previsiones legales,
por lo que el agravio no puede prosperar y el embargo
dispuesto debe ser homologado.

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE:**
CONFIRMAR el auto apelado en todo cuanto fuera
materia de recurso.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la
Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la C.S.J.N.
(Acordada 10/25 y ley 26.856) y devuélvase.

MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ

JUAN PABLO SALAS MARCOS MORAN

LEONARDO JAVIER AMERISE
PROSECRETARIO DE CÁMARA

